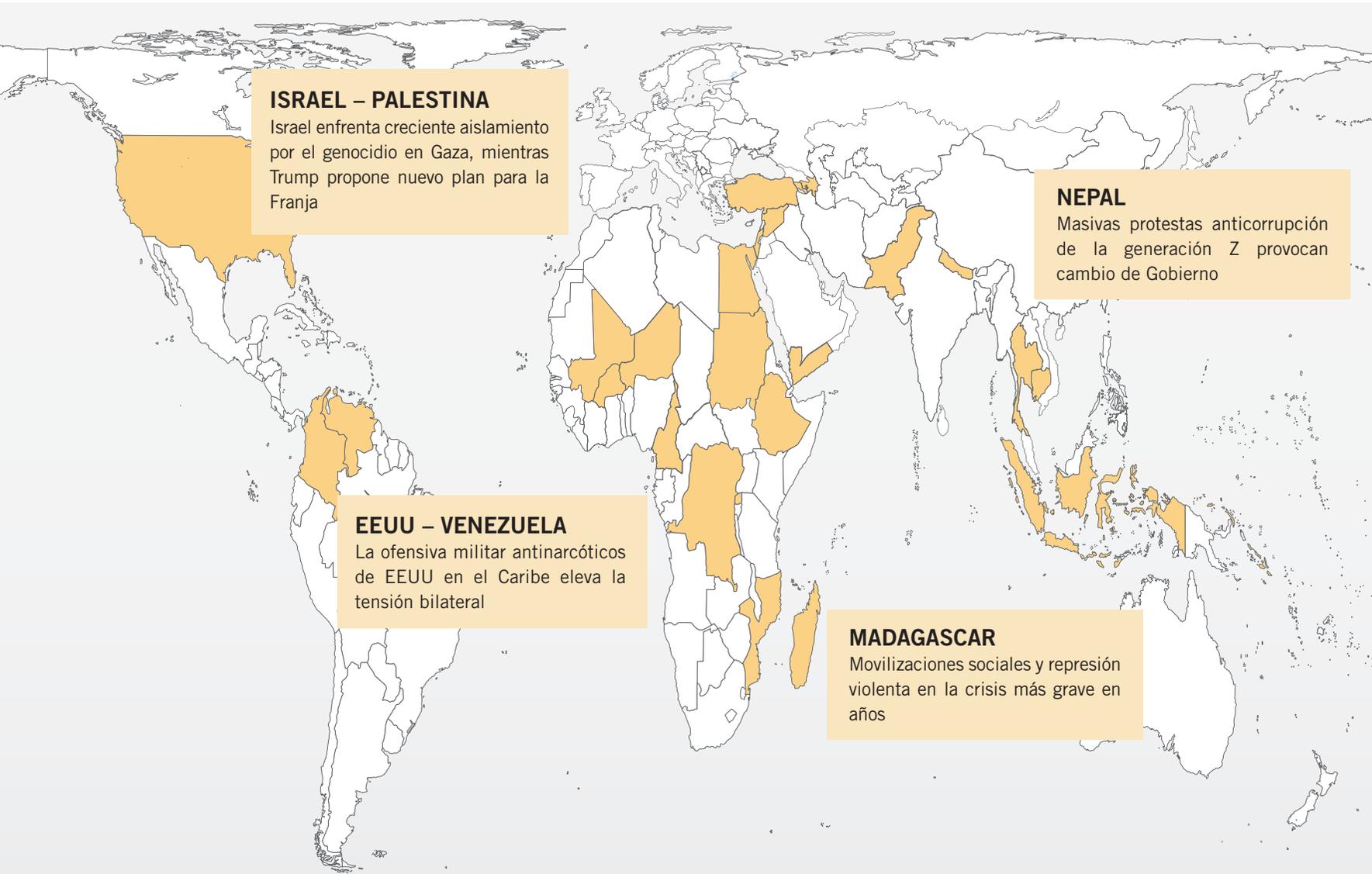


# Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Octubre de 2025

ecp escola de cultura de pau

UAB  
Universitat Autònoma de Barcelona



## ISRAEL – PALESTINA

Israel enfrenta creciente aislamiento por el genocidio en Gaza, mientras Trump propone nuevo plan para la Franja

## NEPAL

Masivas protestas anticorrupción de la generación Z provocan cambio de Gobierno

## EEUU – VENEZUELA

La ofensiva militar antinarcoóticos de EEUU en el Caribe eleva la tensión bilateral

## MADAGASCAR

Movilizaciones sociales y represión violenta en la crisis más grave en años

## Otros casos analizados en esta edición:

### ÁFRICA

África – EEUU  
Burkina Faso  
Camerún  
Etiopía – Egipto – Sudán  
Malí  
Mozambique  
RDC (este) – Rwanda  
Sahel Occidental  
Sudán del Sur

### AMÉRICA

Colombia

### ASIA Y EL PACÍFICO

Camboya – Tailandia  
Indonesia  
Pakistán

### EUROPA

Armenia – Azerbaiyán  
Türkiye (PKK)

### ORIENTE MEDIO

Siria

Con el apoyo de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número abarca el periodo entre julio de 2025 y el 6 de octubre de 2025.

*Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre julio de 2025 y el 6 de octubre de 2025.

## Casos destacados:

**ISRAEL – PALESTINA:** Israel enfrenta creciente aislamiento por el genocidio en Gaza, mientras Trump propone nuevo plan para la Franja

**EEUU – VENEZUELA:** La ofensiva militar antinarcóticos de EEUU en el Caribe eleva la tensión bilateral

**NEPAL:** Masivas protestas anticorrupción de la generación Z provocan cambio de Gobierno

**MADAGASCAR:** Movilizaciones sociales y represión violenta en la crisis más grave en años

## Otros casos analizados en esta edición:

### ÁFRICA

ÁFRICA – EEUU: Varios países africanos firman acuerdos con la administración Trump sobre deportaciones masivas que suponen una violación de derechos humanos

BURKINA FASO: La Junta Militar adopta una ley que penaliza la homosexualidad

CAMERÚN: Se agrava el clima de inestabilidad política ante la proximidad de las elecciones presidenciales

ETIOPÍA – EGIPTO – SUDÁN: Etiopía inaugura oficialmente la presa sobre el Nilo Azul, lo que incrementa las tensiones a nivel regional

MALÍ: Continúa el deterioro de la situación política y de seguridad en el país

MOZAMBIQUE. Se inicia el Diálogo Nacional Inclusivo con la ausencia del principal líder opositor

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ESTE) – RWANDA: Se incumplen los acuerdos entre los dos países y entre RDC y el M23 mientras persiste la violencia en el este de RDC

SAHEL OCCIDENTAL: Burkina Faso, Malí y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional

SUDÁN DEL SUR: Aumenta el riesgo de colapso del acuerdo de paz en el país

### AMÉRICA

COLOMBIA: El Gobierno reabre negociaciones con el Clan del Golfo en Qatar

### ASIA

CAMBOYA – TAILANDIA: Los enfrentamientos fronterizos entre ambos países provocan la muerte de decenas de personas y el desplazamiento forzoso de otras 300.000

INDONESIA: El país vive las protestas más masivas de las últimas décadas

PAKISTÁN: Protestas multitudinarias en la Cachemira administrada por Pakistán finalizan tras alcanzarse acuerdo con el Gobierno

### EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Avances en las negociaciones, pero criminalización de la sociedad civil pro-paz por el Gobierno azerbaiyano

TÜRKIYE (PKK): Nuevos pasos en el proceso de paz, junto a llamamientos a fortalecerlo

### ORIENTE MEDIO

SIRIA: Diversos focos de violencia evidencian los múltiples retos de la transición en el país, que celebra sus primeras elecciones post-Assad



Fuente: UNICEF

## ISRAEL – PALESTINA

### Israel enfrenta creciente aislamiento por el genocidio en Gaza, mientras Trump propone nuevo plan para la Franja

Durante el trimestre se han intensificado las críticas a Israel y se ha escenificado un mayor aislamiento internacional al Gobierno de Benjamin Netanyahu en un contexto de severo agravamiento de la situación en Gaza y deterioro también en Cisjordania, de creciente consenso legal y político sobre la comisión de genocidio contra población de Gaza; y, a finales del período, de un nuevo plan de Donald Trump para el futuro de la Franja. Las condiciones en la Franja han empeorado de manera significativa en los últimos meses, en particular desde marzo, tras la decisión de Israel de abandonar el acuerdo de cese el fuego alcanzado a principios de año, multiplicar sus ofensivas e imponer un bloqueo aún más severo al territorio palestino, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria y otros bienes esenciales. A finales de agosto, expertos de la ONU confirmaron que la principal ciudad de Gaza y sus alrededores se encontraba en una situación de **hambruna provocada por la acción humana** y advirtieron sobre la posible ampliación de este diagnóstico a todo el territorio gazatí. El Integrated Food Security Phase Classification (IPC, por sus siglas en inglés) – organización de referencia a la hora de valorar los niveles de inseguridad alimentaria a nivel internacional– subrayó la urgencia de actuar ante una situación que amenaza con incrementar exponencialmente las muertes en un territorio ya devastado. En este contexto, continuaron multiplicándose los hechos de violencia y los ataques

de las fuerzas israelíes contra población palestina durante la búsqueda desesperada de alimentos. Desde finales de mayo y hasta principios de agosto la ONU había contabilizado casi **1.400 muertes de personas mientras intentaban conseguir comida, la mayoría en las inmediaciones de los centros de distribución de alimentos controlados por Israel** –administrados por la controvertida “Gaza Humanitarian Foundation” (GHF)– y en la ruta de los escasos convoyes de ayuda que han podido acceder a la Franja.

Las cifras de letalidad entre la población de Gaza no dejaron de aumentar durante el último trimestre debido también a la intensificación de ataques indiscriminados y deliberados, que afectaron principalmente a población civil en todo el territorio. Según el balance de OCHA, **hasta el 1 de octubre ya habían muerto más de 66.000 palestinos y palestinas** y la cifra de personas heridas bordeaba las 170.000. A esto se suma que el 88% del territorio de la Franja estaba convertido en zonas militarizadas por Israel o afectado por órdenes de desplazamiento forzado. La situación se hizo especialmente crítica tras la decisión de Israel de lanzar una ofensiva militar terrestre en Ciudad de Gaza, la urbe más poblada del territorio. El Gobierno de Netanyahu instó a marchar hacia el sur al cerca de millón de habitantes de la ciudad e inició una campaña de intensos bombardeos. En pocas semanas

más de 400.000 personas habían abandonado la ciudad, pero decenas de miles permanecían en Ciudad de Gaza por falta de medios para emprender una nueva huida o ante la constatación de que no hay espacios seguros en la Franja. El inicio de la campaña militar terrestre el 16 de septiembre amenazaba con una nueva escalada de la violencia, mientras ministros israelíes amenazaban que todas las personas que se quedaran en Ciudad de Gaza serían consideradas terroristas o colaboradoras.

En paralelo, Israel continuó con su política de ataques a hospitales y otras infraestructuras civiles críticas, así como sus ofensivas contra periodistas palestinos, en un contexto de bloqueo al acceso y cobertura informativa internacional en Gaza. Uno de los episodios que causaron mayor consternación y condena durante el trimestre fue el doble ataque contra el hospital Nasser que se cobró la vida de una veintena de personas, entre ellas cinco periodistas. Con ellos se elevó a 240 el número de periodistas palestinos asesinados en Gaza desde octubre de 2023, convirtiendo a la Franja en el territorio más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Según datos de ACLED, **el 60% de las muertes de periodistas en hechos de violencia en todo el mundo entre octubre de 2023 y agosto de 2025 se produjeron en Gaza**. El episodio del Hospital Nasser también reforzó las denuncias sobre la comisión de crímenes de guerra por parte de Israel por los ataques sistemáticos contra civiles, profesionales médicos y periodistas. En julio, una investigación de +972 Magazine y Local Call alertó sobre los **reiterados ataques aéreos (“double tap”) en áreas que ya habían sido objeto de bombardeos, con la aparente intencionalidad de asesinar a personal médico y personas implicadas en los rescates**.

En este contexto, uno de los hechos más significativos del trimestre fue el pronunciamiento de **la Comisión Internacional de Expertos Independientes de la ONU que concluyó que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza**. La comisión –que hizo público su informe el 16 de septiembre, el mismo día que Israel inició su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza– encontró evidencias de que Israel estaba cometiendo cuatro de los cinco actos constitutivos de genocidio según la **Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio**: asesinar a integrantes de un grupo, causarles serios daños físicos y mentales, infligir deliberadamente a un grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial e imponer medidas tendientes a evitar los nacimientos dentro de un grupo de población. El documento –que constituye el posicionamiento más contundente de la ONU sobre el genocidio contra la población palestina– constata además la existencia de un patrón de conducta que demuestra la intención genocida, señala la responsabilidad de líderes políticos y militares israelíes en la incitación y comisión del genocidio y apela a la responsabilidad de todos los Estados del mundo

**El 88% del territorio de la Franja estaba convertido en zonas militarizadas por Israel o afectado por órdenes de desplazamiento forzado**

para prevenir y castigar este crimen, como exige la ley internacional.

Junto a estas dinámicas, en los últimos meses también se hicieron más explícitas las críticas a Israel por sus políticas contra la población palestina. A nivel español, por ejemplo, el Gobierno aprobó a finales de septiembre un **conjunto de nueve medidas para intentar frenar el genocidio en Gaza, entre las que se incluye un embargo de armas por decreto ley** –como venían reclamando diversos colectivos de la sociedad civil– y la prohibición de tránsito por los puertos españoles de barcos que transporten combustible con destino a las fuerzas armadas israelíes (el embargo de armas debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días). Paralelamente, se produjeron movilizaciones de gran notoriedad, como las manifestaciones que derivaron en la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en protesta por la participación de un equipo de Israel y la salida desde Barcelona de la Flotilla Global Sumud, iniciativa impulsada desde la sociedad civil internacional para intentar sortear el bloqueo humanitario a Gaza y exponer la inacción y/o complicidad de los Estados frente al genocidio en Gaza. Israel interceptó los barcos de la flotilla en aguas internacionales próximas a Gaza y detuvo al conjunto de activistas. Al cierre de esta edición, el Gobierno de Netanyahu había liberado a la mayor parte, que denunciaron humillaciones y tratos degradantes.

Adicionalmente, la Comisión Europea aprobó por primera vez un plan para **suspender algunos aspectos del acuerdo comercial entre la UE e Israel**, vigente desde hace tres décadas. La decisión final depende de los 27 Estados de la Unión. El paquete de medidas de presión a Israel también propone sanciones a los ministros ultras israelíes de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. La decisión de la Comisión Europea, que se atribuye en parte a la presión política de la ciudadanía, se argumentó como respuesta al grave deterioro de la situación humanitaria, el bloqueo a la entrada de ayuda, la intensificación de las operaciones militares y la decisión del Gobierno israelí de avanzar en sus planes de ampliar los asentamientos ilegales en Cisjordania. En agosto, Israel –a través del ministro Smotrich, que opera como gobernador de facto de Cisjordania– anunció su aprobación al polémico proyecto de asentamientos conocido como “E1”, que supondrá la construcción de más de 3.400 viviendas y edificios comerciales en un área entre Jerusalén Este y el asentamiento de Ma’ale Adumin. El controvertido plan –ideado hace décadas, pero no puesto en marcha hasta ahora–, tendrá como consecuencia la separación de la parte norte y sur de Cisjordania y la desconexión definitiva de Jerusalén Este del resto de Cisjordania. **Smotrich declaró abiertamente que el plan pretendía “enterrar definitivamente la idea de un Estado palestino”**.

## Reconocimientos al Estado palestino: ¿un gesto meramente simbólico?

En este contexto, se aceleraron las iniciativas diplomáticas que intentan dar un nuevo impulso a la fórmula de dos Estados –declarada moribunda desde antes de los hechos del 7 de octubre de 2023, tras más de tres décadas de proceso de Oslo. A finales de julio tuvo lugar la anunciada **Conferencia de Alto Nivel para la Solución de dos Estados, fruto de una iniciativa diplomática promovida conjuntamente por Francia y Arabia Saudita** desde septiembre de 2024. Sus resultados, recogidos en un comunicado conocido como la **Declaración de Nueva York**, dibujan una hoja de ruta que incluye un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes retenidos por Hamas, el desarme del grupo palestino, el despliegue de una misión de estabilización bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y el establecimiento de condiciones para un Estado palestino y la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes. La Declaración de Nueva York fue refrendada el 12 de septiembre por la Asamblea General de la ONU por 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. A lo largo de una nueva reunión de la Conferencia para los dos Estados (22 septiembre) y durante el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas (23 septiembre), un conjunto de 10 Estados –Andorra, Australia, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Reino Unido– anunciaron su reconocimiento formal al Estado palestino. De esta manera, se elevó a 157 el total de países que reconocen al Estado de Palestina. En este escenario se produjo **la alocución del primer ministro israelí ante la Asamblea General de la ONU, ocasión en la que se escenificó el creciente aislamiento de Israel –la mayoría de las delegaciones abandonaron la sala durante su discurso**. Netanyahu consideró los reconocimientos al Estado palestino como un premio a Hamas e insistió en que permitir su establecimiento sería un suicidio para Israel. EEUU también expresó su rechazo, tanto a la Declaración de Nueva York como a los reconocimientos al Estado palestino.

Los esfuerzos por resucitar la fórmula de dos Estados y, en particular, la cuestión del reconocimiento al Estado palestino, suscitaron diversos análisis sobre su significado e impacto. Por un lado, la medida fue valorada por algunas voces como un gesto necesario y relevante en un contexto en que el Gobierno israelí ha planteado abiertamente su posición contraria a un Estado palestino. Además, se considera que la iniciativa supone dejar atrás las reticencias de algunos Estados para avanzar en el respaldo a las aspiraciones políticas palestinas más allá del fallido proceso de paz, en el entendido de que **la estatalidad de Palestina se considera como un prerrequisito y no un resultado de las negociaciones**. Por otro lado, sin embargo, un gran número de análisis pusieron en entredicho la medida y alertaron sobre un gesto meramente declarativo. Estas aproximaciones

***La Comisión Internacional de Expertos Independientes de la ONU concluyó que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza***

subrayaron que el foco en la cuestión del Estado palestino arriesgaba a desviar la atención de la urgencia de detener el genocidio en Gaza y que podía acabar siendo **un gesto totalmente vacío si no va acompañado de la adopción de otras políticas, como sanciones, embargos efectivos de armas y medidas de presión** a Israel para frenar la masacre y evitar que continúe con sus políticas que hacen totalmente inviable un Estado palestino. Asimismo, se ha advertido, limitar las acciones al reconocimiento del Estado palestino puede **funcionar como una cobertura para gobiernos** –algunos con una importante responsabilidad en la situación actual en Palestina, como Reino Unido– para poder presentar a sus opiniones públicas que han hecho algo, aunque sea de manera muy tardía. Adicionalmente, la medida puede envalentonar aún más al Gobierno de Netanyahu en sus políticas de control de facto del territorio palestino. Miembros del Gobierno israelí defendieron la anexión de Cisjordania como represalia a los reconocimientos de la estatalidad palestina. Desde el punto de vista de diversos analistas, incluyendo voces palestinas, la cuestión del reconocimiento sigue considerándose como un gesto que no supondrá cambios significativos a corto plazo, sobre todo si no se afronta la realidad de fragmentación y apartheid impuesta por Israel y no se actúa, por ejemplo, para poner en práctica resoluciones como la de la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2024 confirmó que la prolongada ocupación militar israelí era ilegal e instó a la comunidad internacional a involucrarse en su desmantelamiento. Asimismo, se advierte que **poner el foco en la estatalidad –más que en el derecho de autodeterminación del pueblo palestino– amenaza con dejar fuera de la ecuación asuntos extremadamente relevantes**, como la situación de la población palestina en Israel y de las personas refugiadas palestinas.

## El (nuevo) plan de Trump para Gaza

En este escenario, el presidente de EEUU anunció una nueva propuesta para abordar la situación en Gaza y la futura gobernanza de la Franja –un territorio que en el pasado ideó convertir en la “Rivera del Mediterráneo”. El **plan de 20 puntos** comparte algunos elementos con la Declaración de Nueva York, pero está inequívocamente más alineado con los intereses de Israel y es muy ambiguo sobre las perspectivas de un futuro Estado palestino. Las medidas del plan incluyen, entre otras cuestiones, el fin inmediato de hostilidades y el restablecimiento del acceso humanitario, la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamas bajo supervisión independiente, el despliegue de una misión internacional que progresivamente asumiría las responsabilidades de seguridad de manos de las fuerzas israelíes, el repliegue de estas fuerzas hasta una zona perimetral “de seguridad”, la marginación total de Hamas de un futuro Gobierno de Gaza y la conformación de un gobierno tecnocrático de transición compuesto por palestinos y expertos internacionales bajo la supervisión

de un organismo internacional –la “Junta de la Paz” – presidido por el propio Trump e integrado por otras figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair. El punto 19 del plan –anunciado en una conferencia conjunta de Trump con Netanyahu en la Casa Blanca– establece que, en función de los avances en la reconstrucción de Gaza y las reformas a la Autoridad Palestina, “es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”. A su regreso a Israel, sin embargo (y en declaraciones en hebreo), **Netanyahu aseguró que no había aceptado un Estado palestino y que el Ejército israelí continuaría controlando la mayor parte de Gaza.**

Trump dio un plazo de pocos días a Hamas para aceptar su propuesta y advirtió al grupo palestino que si no lo hacía daría luz verde a Israel para continuar su ofensiva. Hamas no fue consultado sobre el plan, que contiene elementos que había rechazado públicamente en el pasado. Según trascendió, **el grupo deseaba la revisión de algunos de**

**los puntos, entre ellos el relativo a su desarme total, y clarificaciones sobre el repliegue israelí,** entre otros temas. Diversos análisis subrayaron que el plan de Trump está concebido como un **ultimátum a Hamas para que acepte su rendición, sin garantías ni cronograma claro y sin que exista claridad sobre qué se interpreta por “fin de la guerra”.** La iniciativa sí que parece recoger –al menos sobre el papel– un cambio de postura respecto a posiciones previas de Trump que anticipaban y respaldaban la expulsión de población palestina de la Franja. Además de destacar las zonas grises e imprecisiones del plan que pueden condicionar el futuro de Gaza, analistas subrayaron que otros retos tienen que ver con la disposición de Netanyahu a cumplirlo –teniendo en cuenta los precedentes de su accionar– y con el hecho de que, de implementarse, **el plan podría derivar en una nueva situación de “gestión del conflicto”** sin perspectivas de solución real a largo plazo. Al cierre de esta edición, delegaciones de Israel y Hamas mantenían negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de Trump.



Fuente: US Navy

## EEUU – VENEZUELA

### La ofensiva militar antinarcoóticos de EEUU en el Caribe eleva la tensión bilateral

Desde el mes de agosto, la tensión entre Venezuela y EEUU se incrementó drásticamente, con cuatro ataques contra lanchas que navegaban en aguas internacionales y que provocaron la muerte de **21 personas**, un importante despliegue de la fuerza naval estadounidense cerca de aguas venezolanas, y advertencias por parte de líderes venezolanos sobre una posible agresión militar por parte de EEUU. De la escalada de la crisis, el aspecto que generó mayor alarma internacional fue la secuencia de cuatro ataques –el primero el 2 de septiembre, el último el 3 de octubre— por parte de EEUU contra lanchas presuntamente pilotada por personas acusadas de pertenecer a cárteles de narcotráfico designadas previamente como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Washington. De los cuatro ataques, todos ellos en aguas internacionales del Caribe, solamente en el perpetrado el 15 de septiembre se mencionó explícitamente al cártel venezolano Tren de Aragua. Washington declaró que las embarcaciones objetivo de ataques con cohetes se dirigían a EEUU, pero en como mínimo uno de los casos medios de comunicación señalaron que la embarcación finalmente hundida había dado la vuelta antes de ser impactada. En la misma línea, tras el primer ataque del 2 de septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó inicialmente que la embarcación probablemente se dirigía a Trinidad

y Tobago o a algún otro lugar del Caribe. Algunas de las acciones militares de EEUU contra tales embarcaciones fueron hechas públicas a través de las cuentas en redes sociales del presidente de EEUU, Donald Trump, y del secretario de la guerra, Pete Hegesth. El Gobierno de Venezuela consideró que la muerte de dichas 21 personas son ejecuciones extrajudiciales. Otras voces señalan que el tipo de problema que la Administración estadounidense está tratando de atajar debería ser responsabilidad de la Guardia Costera –y no de las Fuerzas Armadas– que debería resultar en la detención –y no asesinato– de las personas sospechosas.

***Todos los ataques de EEUU contra lanchas fueron en aguas internacionales***

#### **“Conflicto armado no internacional” contra cárteles de la droga**

Ante el **questionamiento** de las acciones del Gobierno de EEUU por parte de algunos Gobiernos y personas expertas en derecho internacional, a principios de octubre el Pentágono **envió** un memorando al Congreso informando de que el presidente Trump había determinado que EEUU está en un “conflicto armado no internacional” con cárteles de la droga que su administración había designado como organizaciones terroristas, y también que los contrabandistas de los cárteles eran “combatientes

ilegales”. Según dicho **memorando**, los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra EEUU”. En paralelo, Trump declaró que su administración también está considerando atacar a los cárteles de la droga “que llegan por tierra”, generando incógnitas e incertidumbre sobre posibles acciones armadas contra cárteles de la droga de México.

Algunos **análisis** consideran que describir tales ataques militares estadounidenses como parte de un conflicto armado sugiere que forman parte de una campaña a largo plazo y no solo ataques puntuales en defensa propia. Otras voces consideran que el intento de Trump de considerar formalmente los ataques contra los cárteles de la droga como un conflicto armado sugerirían que pretende consolidar su derecho a obtener poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

### Despliegue militar en el Caribe

Además de los mencionados ataques, desde el mes de agosto EEUU empezó a desplegar parte de su fuerza naval en aguas cercanas a Venezuela, como ocho buques de guerra, incluyendo tres destructores, una fragata con misiles guiados, un submarino nuclear y más de 4.500 soldados, siendo considerado por algunas voces como **uno de los mayores despliegues militares jamás vistos en la región**. Además, varios cazas F-35 llegaron a Puerto Rico a mediados de septiembre. A principios de octubre, las Fuerzas Armadas **publicaron imágenes** de tales cazas siendo armados con misiles, bombas guiadas y otros artefactos explosivos. Además, también mostraron imágenes del buque de asalto anfíbio USS Iwo Jima, y de los ejercicios militares de la infantería de Marina. El Gobierno publicó que las fuerzas estadounidenses se están desplegando en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las directrices del presidente de EEUU.

Poco después, el 2 de octubre, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que el sistema de defensa aérea del país había detectado cinco aviones de combate F-35 de EEUU volando a solamente 75 kilómetros de la costa venezolana, denunciando que era la primera vez que se observaba un despliegue militar de este tipo. El ministro **declaró** que tal acción por parte de EEUU era una provocación y una amenaza contra la seguridad de la nación y contra la “**seguridad operacional de la aviación civil y comercial**” en el Caribe. Vladimir Padrino López también **anunció** su intención de denunciar lo que calificó como una “incursión ilegal de aeronaves de combate” ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y ante el Consejo de Seguridad y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

### ¿Intervención militar en Venezuela?

Además de los ataques contra los buques que presuntamente portaban droga hacia EEUU, del despliegue militar en el Caribe y de la presunta incursión aérea por parte de cazas estadounidenses, algunos medios publicaron que el Gobierno estaría elaborando **opciones para atacar** a los narcotraficantes dentro de Venezuela, principalmente ataques con drones contra grupos de narcotráfico y laboratorios de drogas. Al ser cuestionada por tales opciones por parte de algunos medios, la Casa Blanca remitió a una declaración previa del presidente en la que no descartaba ninguna opción y en la que advertía que era inaceptable que Venezuela estuviera enviando a narcotraficantes a EEUU.

Según algunos **análisis**, el objetivo que persigue la Administración de Donald Trump con el incremento de la presión militar sería debilitar y aislar a Maduro y su entorno, así como lograr la deserción entre altos mandos militares venezolanos, para lograr un cambio de régimen en Caracas. Según dichos análisis, en su primer mandato Trump ya intentó lograr el derrocamiento de Maduro a través de una fuerte presión militar que en ocasiones pareció que desembocaría en intervención armada. Si bien en el primer mandato el foco del Gobierno de EEUU eran el presunto autoritarismo, fraude electoral, falta de garantías democráticas y crisis económica y humanitaria en Venezuela, en esta ocasión Washington habría optado por incidir en los vínculos entre el régimen venezolano, y en particular Maduro y su entorno, y el narcotráfico. En esta línea, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Maduro de haber sido durante más de una década el líder del Cártel de los Soles, designado como organización terrorista el pasado mes de julio. A mediados de septiembre, el presidente Trump acusó directamente a Maduro de estar involucrado en narcotráfico y le exigió que dejara de enviar droga a EEUU a través de la organización Tren de Aragua. Anteriormente, en febrero, el Departamento de Estado de EEUU ya había designado formalmente a la pandilla venezolana Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, junto con la MS-13 y varios cárteles mexicanos. A principios de agosto, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, **acusó** a Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto hasta 50 millones de dólares, la mayor de la historia del país. Bondi aseguró que en 2025 la Agencia Antidrogas de EEUU había incautado 30 toneladas de narcóticos provenientes de Venezuela, de las cuales siete estarían directamente vinculadas al gobernante. Según la fiscal general, Maduro utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Soles para traficar con drogas letales y provocar el incremento de la violencia en EEUU. Según algunos medios, el Cártel de los Soles es una red conformada y dirigida por altos funcionarios y

militares venezolanos, que participarían del narcotráfico facilitando y protegiendo el paso por territorio venezolano de estupefacientes producidos en Colombia.

A pesar de ello, y de la retórica belicista y acusaciones cruzadas entre ambos Gobiernos, algunos **medios** sostienen que los Gobiernos de EEUU y Venezuela mantienen conversaciones a través de líderes de Oriente Medio que actúan como intermediarios. Según dichos medios, Maduro habría discutido con dichos intermediarios sobre las concesiones que estaría dispuesto a hacer para mantenerse en el poder.

### La reacción de Venezuela

A finales de septiembre, el Gobierno de Venezuela informó de que el presidente Maduro había suscrito un decreto de “**conmoción externa**”, uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la Constitución y que puede ser decretado en caso de un conflicto que “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmó que este estado de excepción, que es la primera ocasión que se invoca, se activaría en caso de una agresión de las fuerzas estadounidenses. Dicha medida **autoriza** a Maduro a, entre otras cuestiones, tomar el control militar de los servicios públicos y de las instituciones estratégicas, cerrar las fronteras o desplegar fuerzas de seguridad o activar a los 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener.

A principios de octubre, el propio Maduro **anunció** nuevos ejercicios militares especiales por parte de las Fuerzas Armadas, la Milicia Bolivariana, las 335 Áreas de Defensa Integral y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPD). En la misma línea, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, **afirmó** que desde el mes de agosto Venezuela está poniendo en práctica planes de defensa de acuerdo a la evolución de la amenaza militar de EEUU. A mediados de septiembre, por ejemplo, Maduro **anunció** la denominada operación “Independencia 200” en 284 frentes de batalla en todo el país para testar su capacidad de fuego, ocupar y defender posiciones, y acordando planes militares de contingencia. A principios de septiembre, el Gobierno llevó a cabo una “primera activación” de la **Milicia Bolivariana** por primera vez en la historia del país y a la vez **anunció** que la campaña de alistamiento desde entonces sería permanente. Maduro aseguró que el objetivo es convocar a 8,2 millones de personas que se inscribieron en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de reservistas creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez. Además, el Gobierno **desplegó** a las Fuerzas Armadas en todo el país para entrenar a civiles y milicianos, e

incrementó la seguridad en los alrededores de los edificios gubernamentales, en particular, el Palacio de Miraflores.

### La dimensión regional e internacional

En este contexto, a principios de octubre el Parlamento de Venezuela aprobó un proyecto de **asociación estratégica y cooperación con Rusia**. Aunque no trascendieron muchos detalles del mismo, el Gobierno declaró que este respondía al nuevo escenario geopolítico del sistema internacional y se fundamentaba en el “derecho internacional, el respeto a la soberanía, el arreglo pacífico de las controversias, el respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos”. Poco después de la firma del acuerdo, el Gobierno venezolano anunció que, tras una larga discusión entre los ministros de exteriores de ambos países, el Gobierno ruso –que ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas– se **comprometió** con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y se ofreció a fortalecer la acción conjunta de ambos países en el marco de Naciones Unidas.

Por otra parte, a mediados de septiembre, varios miembros del Gobierno venezolano, como el ministro de exteriores, Vladimir Padrino, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acusaron a los Gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago de ser “vasallos” de EEUU y de prestarse a sus planes de agresión y a la vez les advirtieron que ambos recibirían una respuesta si se producían ataques contra Venezuela desde su territorio. Tanto Guyana como Trinidad y Tobago han expresado su apoyo al despliegue militar de EEUU en la región y han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico, pero la ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, negó planes conjuntos con EEUU para invadir Venezuela. La **tensión entre Venezuela y Trinidad y Tobago** se inició a principios de junio, después de que Maduro denunciara que había sido capturado un grupo de personas a las que calificó de terroristas y mercenarios que había intentado ingresar al país desde Trinidad y Tobago con armas de guerra. Posteriormente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, amenazó con perseguir a tales grupos “dondequiera que estén”, abriendo la puerta a interpretaciones sobre posibles incursiones en Trinidad y Tobago. Por su parte, Kamla Persad-Bissessar **escaló** la crisis diplomática cuando abrió la posibilidad a que la Guardia Costera pueda usar fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que entre en aguas de Trinidad y Tobago desde Venezuela y cuando advirtió que su Gobierno revisaría su **política hacia los migrantes venezolanos**, particularmente aquellos en edad militar. En cuanto a la tensión con **Guyana**, a principios de octubre la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acusó a la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil de proporcionar recursos económicos al gobierno de Guyana con el objetivo de facilitar una agresión militar contra su país.



Fuente: Wikimedia Commons

## NEPAL

### Masivas protestas sociales de la generación Z contra la corrupción derivan en un cambio de Gobierno

Nepal atravesó una grave crisis política que derivó en un cambio de Gobierno como consecuencia de las protestas sociales que paralizaron el país durante varios días de septiembre, forzaron la salida del primer ministro nepalí, Sharma Oli y desembocaron en el nombramiento de un nuevo Gobierno interino. **Las protestas, lideradas por activistas de la llamada “generación Z”** –nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010–, tenían como eje central la denuncia de la corrupción política e institucional generalizada en el país, que ha involucrado a diferentes dirigentes del país incluyendo los tres últimos primeros ministros.

#### El nepotismo en las redes sociales, la gota que colma el vaso

El detonante que dio lugar al inicio de las manifestaciones en las calles fue la prohibición de 26 plataformas de redes sociales en el país en el marco de la aprobación de una legislación restrictiva que tenía el objetivo de ejercer un mayor control sobre los contenidos difundidos a través de estas plataformas. La falta de repuesta por parte de las empresas responsables de las redes sociales (incluyendo las más populares como Facebook, Instagram, WhatsApp,

YouTube y X) a la exigencia de registrarse ante las autoridades nepalíes en un plazo de siete días llevó al Gobierno nepalí a desconectar estas redes. En paralelo, una campaña en redes sociales mostrando los comportamientos extravagantes y estilos de vida lujosos por parte de hijos de líderes políticos nepalíes, extendió el descontento entre amplios sectores de la juventud nepalí, sin acceso a oportunidades educativas y laborales y afectados por la pobreza y la precariedad. La campaña contra los llamados “nepokids” y la prohibición de las redes sociales, interpretada como un intento de silenciar el descontento social, dieron lugar a masivas movilizaciones sociales en las que la respuesta policial, con utilización de fuego real, desembocó en la muerte de 19 personas, en su mayoría jóvenes de menos de 30 años, incluyendo menores de edad, solo en el primer día de las protestas, en las que también resultaron heridas otras 400 personas. Esta situación llevó a una escalada de la tensión social y en el segundo día de las manifestaciones **la violencia se incrementó notablemente y manifestantes prendieron fuego a los edificios del Parlamento, el Tribunal Supremo, la Oficina de la Presidencia y la sede de Kantipur Media Group**, el principal conglomerado de prensa nepalí. Las protestas se extendieron a las viviendas de varios líderes políticos. Numerosos actores y otras figuras

públicas destacadas del país se unieron a las denuncias públicas y las protestas se ampliaron a numerosas ciudades nepalíes más allá de Katmandú, escenario tradicional de las movilizaciones políticas. La creciente escalada de la violencia, que ocasionó la muerte de 72 personas y dejó más de 1.000 heridos, llevó a que varios ministros incluyendo el ministro de Interior presentaran su renuncia y, finalmente, a la dimisión del propio primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli.

### Cambio de gobierno y convocatoria de elecciones

Tras la crisis de gobierno como consecuencia de la cadena de renuncias, el presidente, Ramchandra Paudel, inició una serie de negociaciones con el jefe de las Fuerzas Armadas, Ashok Raj Sigdel, y los manifestantes, que llevaron al nombramiento como primera ministra de Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, primera mujer en ocupar el cargo y candidata preferida del movimiento de jóvenes que protagonizó las masivas protestas sociales de los días previos. El nombre de Karki emergió a través de los debates convocados en Discord, una aplicación de mensajería muy utilizada en el mundo de los videojuegos, en los que participaron decenas de miles de jóvenes nepalíes, que se unieron al servidor Youths Against Corruption, en el que llegaron a participar 100.000 personas. El acuerdo también contemplaba la disolución del Parlamento tras su nombramiento. Karki era una figura respetada por la opinión pública y contaba con reconocimiento por su independencia así como por su participación durante la década de los noventa en las movilizaciones democráticas contra el sistema político Panchayat de monarquía absoluta y prohibición de los partidos políticos, motivo por el que fue encarcelada en ese momento. La inestabilidad política ha caracterizado a Nepal desde el fin del conflicto armado, la abolición de la monarquía en 2008 y la aprobación de una nueva Constitución en 2015. Trece Gobiernos se han sucedido en estos años, pero siempre encabezados por tres dirigentes políticos: K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal-Unificado Marxista-Leninista (CPN-UML); Pushpa

Kamal Dahal, del CPN-Centro Maoísta; y Sher Bahadur Deuba, del Congreso Nepalí (NC).

La falta de avances en las diferentes reformas políticas comprometidas por los sucesivos ejecutivos tras el fin de la Monarquía ha generado un sentimiento de frustración en diferentes sectores de la población nepalí, incluyendo la juventud. Diferentes protestas sociales en los últimos meses, como por ejemplo las llevadas a cabo por profesionales del ámbito educativo, fueron respondidas con medidas represivas, incrementando el descontento entre la población. La nueva primera ministra conformó un Gobierno interino en los días siguientes a su nombramiento, disolvió el Parlamento y señaló que el 5 de marzo se celebrarían elecciones. Marcando distancias con anteriores ejecutivos, hizo un llamamiento a la unidad para la reconstrucción del país y señaló que debía escucharse a las generaciones más jóvenes en sus peticiones de fin a la corrupción, buena gobernanza e igualdad económica.

*La falta de avances en las reformas políticas comprometidas tras el fin de la Monarquía ha generado frustración en diferentes sectores de la población nepalí, incluyendo la juventud*

Las movilizaciones juveniles nepalíes seguían la estela de movilizaciones previas en otros países asiáticos, también de carácter masivo, como las que tuvieron lugar en Sri Lanka y Bangladesh en los años previos y que también llevaron a la deposición de los gobiernos en estos países y la conformación de nuevos ejecutivos. En Nepal, las movilizaciones se caracterizaron por haber estado protagonizadas fundamentalmente por la población más joven y por haber puesto en el centro de las reivindicaciones cuestiones vinculadas a la lucha contra la corrupción y el nepotismo, ejemplificados por el estilo de vida de los hijos de los dirigentes políticos difundido a través de las redes sociales y que sirvió de acicate para que miles de jóvenes en todo el país se unieran a las protestas. Al mismo tiempo, la crisis de Nepal evidenció las nuevas formas de hacer política de la generación Z, vinculadas a la utilización de redes y plataformas sociales y sin el protagonismo de liderazgos individuales. Los errores de cálculo por parte del Gobierno de Sharma Oli con la prohibición de las redes sociales, mostraron la desconexión con la juventud nepalí y acabaron propiciando la conformación de un nuevo Ejecutivo y la convocatoria de elecciones.



Fuente: MaybeMatchbox

## MADAGASCAR

### Movilizaciones sociales y represión violenta en la crisis más grave en años

Madagascar atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. Desde finales de septiembre de 2025, el país ha sido escenario de intensas protestas encabezadas mayoritariamente por jóvenes agrupados en el movimiento “Generación Z Madagascar”, que inicialmente se movilizó contra los cortes reiterados de agua y electricidad, pero que rápidamente transformó su agenda en un cuestionamiento profundo al Gobierno del presidente Andry Rajoelina.

#### Del cuestionamiento de los servicios básicos a la exigencia de dimisión del presidente

Las manifestaciones comenzaron en Antananarivo, la capital, el 25 de septiembre, y se extendieron a otras ciudades importantes como Toamasina y Antsiranana. Las manifestaciones denunciaban inicialmente los cortes reiterados de agua y electricidad, pero rápidamente se ampliaron no solo a la precariedad de estos servicios básicos, sino también hacia la corrupción, la mala gestión gubernamental y la falta de oportunidades para la juventud. A medida que se intensificaba la represión, el movimiento adquirió un carácter más político, exigiendo directamente la dimisión del presidente.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue extremadamente violenta. La Policía y el Ejército

recurrieron al uso de gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real contra los manifestantes. Según cifras de la ONU, al menos 22 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Entre las víctimas hubo tanto manifestantes como transeúntes alcanzados por la represión, así como personas muertas durante los saqueos y disturbios que siguieron a las protestas. El [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk](#), expresó su “consternación” ante el uso desproporcionado de la fuerza y pidió investigaciones independientes y justicia para las víctimas. [Amnistía Internacional también condenó los hechos](#). Ante la magnitud de la crisis, el presidente Rajoelina anunció el 29 de septiembre la [disolución de su Gobierno](#) y pidió a la población enviar candidaturas para la formación de un nuevo gabinete. Durante una alocución televisada, [se disculpó por la ineficacia de algunos de sus ministros, aunque este gesto fue percibido como insuficiente](#). Lejos de calmar la situación, la decisión fue recibida con burlas en redes sociales y más movilizaciones en la calle.

#### La situación económica agrava el malestar social

Las [causas profundas de esta crisis son múltiples y estructurales](#). Madagascar es uno de los países más pobres del mundo: el 75% de su población vive por

debajo del umbral de la pobreza. Las infraestructuras básicas, como el suministro eléctrico y de agua, están deterioradas, generando apagones de más de 12 horas diarias en algunos barrios. La situación económica, marcada por el desempleo juvenil, la inflación y la falta de inversión, ha agravado el malestar social. A esto se suma el desgaste político del presidente Rajoelina, quien llegó al poder por primera vez en 2009 tras un golpe de Estado y fue reelegido en 2023 en unas elecciones muy cuestionadas.

Para gran parte de la ciudadanía, la gestión del presidente Rajoelina representa la continuidad de un sistema corrupto y desconectado de las necesidades

del pueblo. El hecho de que la protesta esté liderada por la juventud, organizada a través de redes sociales, refleja una generación que ya no acepta pasivamente la precariedad ni las promesas incumplidas. En las calles, las consignas como “Miala Rajoelina” (“Rajoelina, vete”) muestran claramente que **la crisis ha superado el ámbito de los servicios básicos para convertirse en un movimiento de oposición** que cuestiona al Gobierno en su conjunto y la situación de injusticia económica generalizada. La evolución de la situación es incierta, ya que mientras las autoridades mantienen el toque de queda nocturno y refuerzan el control policial, el movimiento juvenil parece decidido a seguir movilizado, marcando un antes y un después en la historia reciente del país.

## ÁFRICA

**ÁFRICA – EEUU:** Varios países africanos firman acuerdos con la administración Trump sobre deportaciones masivas que suponen una violación de derechos humanos

**BURKINA FASO:** La Junta Militar adopta una ley que penaliza la homosexualidad

**CAMERÚN:** Se agrava el clima de inestabilidad política ante la proximidad de las elecciones presidenciales

**ETIOPÍA – EGIPTO – SUDÁN:** Etiopía inaugura oficialmente la presa sobre el Nilo Azul, lo que incrementa las tensiones a nivel regional

**MALÍ:** Continúa el deterioro de la situación política y de seguridad en el país

**MOZAMBIQUE:** Se inicia el Diálogo Nacional Inclusivo con la ausencia del principal líder opositor

**RDC (ESTE) – RWANDA:** Se incumplen los acuerdos entre los dos países y entre RDC y el M23 mientras persiste la violencia en el este de RDC

**SAHEL OCCIDENTAL:** Burkina Faso, Malí y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional

**SUDÁN DEL SUR:** Aumenta el riesgo de colapso del acuerdo de paz en el país

### ÁFRICA – EEUU

#### Varios países africanos firman acuerdos con la administración Trump sobre deportaciones masivas que suponen una violación de derechos humanos

Varios países africanos han alcanzado en los últimos meses acuerdos con la administración de Donald Trump para aceptar en su territorio a migrantes y solicitantes de asilo deportados desde EEUU, aunque no sean nacionales suyos. Esta política forma parte de la campaña de deportaciones masivas anunciada por Trump en su segundo mandato, que busca enviar a terceros países a personas que no pueden ser repatriadas a sus lugares de origen.

Rwanda, Uganda, Sudán del Sur, Eswatini y, más recientemente Ghana, figuran entre los Estados que han aceptado recibir personas deportadas. En el caso de **Rwanda, el Gobierno ha confirmado que acogerá hasta 250 personas**, y a finales de agosto ya desembarcaron los primeros siete deportados. Rwanda anunció promesas de

asistencia en salud, formación laboral y alojamiento, así como **visitas de organizaciones internacionales, como la IOM**. Sin embargo, un acuerdo de similares características entre **Rwanda y el Reino Unido acabó aparcado en 2024** después de diversas batallas legales y la subida al poder del Partido Laborista. **Uganda ha establecido un acuerdo temporal** condiciones –no recibirá personas con antecedentes penales ni menores no acompañados, y prefiere que sean africanos– mientras que **Sudán del Sur y Eswatini** ya han recibido pequeños grupos de personas deportadas. Ghana, por su parte, dio un giro respecto a su rechazo del plan británico en 2022 y aceptó a 14 migrantes, argumentando solidaridad africana.

**Diversos análisis apuntan a una combinación de factores** que explican la disposición de estos gobiernos: evitar sanciones comerciales o arancelarias, mejorar relaciones bilaterales con Washington y ganar margen político interno. Uganda, por ejemplo, espera negociar la reducción de tarifas estadounidenses que afectan a sus exportaciones agrícolas. En otros casos, como Sudán del Sur, se trata de revertir restricciones de visados impuestas por EEUU.

Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, denuncian que estos acuerdos vulneran principios básicos del derecho internacional, como la prohibición de devolver a personas a países donde puedan sufrir tortura o persecución. En Eswatini, los deportados han sido recluidos en prisión y se les ha negado acceso a abogados, mientras en Ghana uno de los recién llegados ya ha sido reenviado a Gambia pese a que podría enfrentar persecución por su orientación sexual. Críticos en África y en EEUU sostienen que la práctica convierte a ciertos países en “vertederos humanos” y que equipara a los migrantes con mercancía intercambiada por concesiones políticas o comerciales.

## BURKINA FASO

### La Junta Militar adopta una ley que penaliza la homosexualidad

El 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa de Transición (ALT) de Burkina Faso –en vigor desde que los militares tomaron el poder bajo el liderazgo del ahora presidente Ibrahim Traoré, después de dos golpes de Estado en 2022– aprobó por unanimidad (71 votos a favor) una **ley que condena a los “autores de prácticas homosexuales”** a penas de hasta cinco años de prisión, junto con sanciones económicas de entre 3.000 y 15.000 euros. El texto también recoge que, en caso de reincidencia, “las penas se duplicarán” y que, si la persona condenada es extranjera, “podrá ser expulsada del territorio nacional”. De este modo, Burkina Faso se convierte en el último país africano en prohibir la homosexualidad, uniéndose a más de la mitad de los países africanos que penalizan la orientación sexual (33 de 54, según la **Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales** (ILGA)). Algunos de ellos aplican penas de prisión e incluso la pena de muerte, como es el caso de Mauritania, Somalia, Uganda y 12 regiones del norte de Nigeria. Actualmente, en el continente únicamente Sudáfrica reconoce el matrimonio, la adopción y la unión civil entre personas LGTBIQ+, aunque en los últimos años Botsuana, Gabón y Angola también han modificado su código penal para despenalizar la homosexualidad. Las medidas anti-homosexualidad en el continente forman parte de las agendas políticas ultraconservadoras de asociaciones evangelistas estadounidenses que operan en el continente bajo **la falsa premisa de que “no es africano ser gay”**.

## CAMERÚN

### Se agrava el clima de inestabilidad política en torno a las elecciones presidenciales

Camerún vive una coyuntura política extremadamente tensa en torno a las elecciones presidenciales del 12 de octubre. El país está gobernado desde hace 43 años por Paul Biya, de 92 años, el jefe de Estado más longevo en el poder a nivel mundial. **Su decisión de presentarse a**

**un octavo mandato** ha reavivado los debates sobre su capacidad para seguir gobernando y ha expuesto de nuevo los déficits democráticos y las graves vulneraciones de derechos humanos que caracterizan a su régimen. El proceso electoral ha estado marcado por irregularidades y restricciones al espacio cívico. La **comisión electoral (ELECAM) excluyó al principal rival de Biya, Maurice Kamto**, quien ya había quedado segundo en 2018. La decisión, confirmada por el Tribunal Constitucional, dejó a la oposición debilitada y fragmentada, con varias candidaturas rivales (Bello Bouba Maïgari, Issa Tchiroma Bakary, Cabral Libii, Joshua Osih), incapaces de unirse frente al presidente. En paralelo, las fuerzas de seguridad han reprimido con violencia a simpatizantes opositores: más de 50 fueron arrestados en agosto en Yaundé durante protestas contra las decisiones del Tribunal Constitucional. **La ONU denunció el cierre del espacio democrático**, la prohibición de mítines, la suspensión de organizaciones civiles y la intimidación a periodistas y activistas.

Las raíces de esta crisis se encuentran en el autoritarismo prolongado de Paul Biya, quien en 2008 eliminó los límites de mandato para perpetuarse en el poder. Bajo su Gobierno, Camerún ha experimentado corrupción sistémica, represión a la disidencia, manipulación de procesos electorales y ausencia de alternancia democrática. La exclusión de candidatos como Kamto refleja la voluntad del régimen de controlar el proceso electoral para garantizar la continuidad.

El clima de inseguridad añade complejidad al proceso. En las provincias anglófonas del Noroeste y Suroeste, los actores político-militares secesionistas han prometido boicotear las elecciones, decretando un “lockdown” (cierre) para impedir la votación. Además, en la provincia de Extremo Norte continúan los ataques de Boko Haram y del Estado Islámico en África Occidental (ISWA), con secuestros y asesinatos de civiles, **según destaca el International Crisis Group**. Asimismo, la falta de soluciones al conflicto anglófono y la inseguridad en el norte agravan el descontento popular. El Gobierno utiliza estos conflictos para justificar una fuerte militarización y restringir aún más las libertades públicas. El proceso electoral de 2025 es considerado por observadores internacionales como una prueba de resistencia para la estabilidad del país. Con la oposición dividida y el aparato estatal bajo control de Biya, el resultado parece inclinado hacia su reelección. Sin embargo, esta continuidad podría profundizar la crisis de legitimidad, aumentar la frustración social y alimentar la violencia tanto en las regiones anglófonas como en el resto del país.

## ETIOPÍA – EGIPTO – SUDÁN

### Etiopía inaugura oficialmente la presa sobre el Nilo Azul, lo que incrementa las tensiones a nivel regional

Etiopía ha inaugurado oficialmente a principios de septiembre la Gran Presa del Renacimiento Etíope

(GERD, por sus siglas en inglés), situada en el Nilo Azul, marcando un hito en la historia energética de África. Con una altura de 170 metros y una capacidad de generación de 5.150 megavatios, la GERD se convierte en la mayor central hidroeléctrica del continente y una de las veinte más grandes del mundo. El proyecto, iniciado en 2011 y valorado en unos 5.000 millones de dólares, ha sido financiado mayoritariamente por el propio Estado etíope y aportaciones ciudadanas. Su inauguración simboliza el esfuerzo del Gobierno del primer ministro Abiy Ahmed por electrificar el país y exportar excedente de energía a los países vecinos.

Sin embargo, **la obra ha intensificado las tensiones con Egipto y, en menor medida, Sudán**, que dependen casi por completo del Nilo para cubrir sus necesidades de agua. Egipto, con más de 100 millones de habitantes y una pluviometría mínima, teme que la presa reduzca el caudal en periodos de sequía y denuncia que el proyecto viola acuerdos históricos sobre la gestión del río. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ha calificado la GERD como una “amenaza existencial” y ha advertido de que su país defenderá sus derechos hídricos por todos los medios. Sudán, por su parte, comparte esas inquietudes y reclama junto a Egipto un acuerdo legalmente vinculante sobre el llenado y la gestión de la presa. No obstante, también reconoce posibles beneficios en materia de control de inundaciones y acceso a electricidad barata.

Etiopía sostiene que la GERD no supone un perjuicio significativo para sus vecinos y la presenta como una oportunidad de cooperación regional. Investigaciones independientes confirman que, hasta la fecha, no se han registrado alteraciones drásticas en el flujo del río, gracias a lluvias favorables y a una estrategia gradual de llenado. Pese a ello, El Cairo ha elevado su protesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ha reforzado alianzas estratégicas con países de la región contrarios a Addis Abeba. Mientras tanto, la presa se ha convertido en símbolo de orgullo nacional para Etiopía, donde casi la mitad de la población carecía de electricidad hace apenas tres años.

**El Nilo ha sido históricamente fuente de disputas entre los países de su cuenca, tal y como ha señalado la ECP**, entre otros análisis. Los tratados heredados de la etapa colonial otorgaban a Egipto y Sudán un control desproporcionado sobre sus aguas, dejando de lado a los estados situados aguas arriba. La construcción de la GERD alteró ese statu quo, desencadenando un pulso diplomático que, pese a múltiples rondas de negociación bajo auspicio de la UA y actores internacionales, permanece sin resolución. A medida que el cambio climático ha agudizado la escasez hídrica y la presa entra en pleno funcionamiento, la necesidad de cooperación se vuelve cada vez más urgente, aunque las dinámicas regionales de rivalidad siguen dificultando un acuerdo.

## MALÍ

### Continúa el deterioro de la situación política y de seguridad en el país

Durante el tercer trimestre de 2025 Malí experimentó una intensificación significativa de la violencia yihadista, una profundización de las divisiones dentro del Ejército y un creciente aislamiento político internacional. En julio, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculado a al-Qaeda, lanzó diferentes ataques coordinados en las regiones de Ségou y Kayes, ampliando su radio de acción hacia el oeste, una zona hasta entonces relativamente libre de violencia. Los combates dejaron decenas de muertos y evidenciaron la debilidad del Ejército, que depende cada vez más del apoyo del Cuerpo de África de Rusia (antes Grupo Wagner). Además, el 14 de julio, JNIM atacó, junto con la coalición separatista Frente de Liberación de Azawad (FLA), un convoy militar en Kidal, lo que sugiere una posible cooperación táctica entre grupos yihadistas y separatistas del norte. En septiembre, JNIM impuso un **bloqueo económico en las regiones de Kayes y Nioro**, áreas fronterizas con Senegal y Mauritania, respectivamente, paralizando el corredor comercial que conecta Bamako con Senegal y del cual depende gran parte de las importaciones nacionales, incluidos el combustible y productos básicos. Los intentos del Ejército de escoltar convoyes comerciales fracasaron y, el 14 de septiembre, un ataque destruyó más de 40 camiones cisterna bajo escolta militar. Este bloqueo, que afecta una zona que concentra el 80% de la producción de oro del país, representa un duro golpe económico y estratégico para la Junta, además de evidenciar la incapacidad del Estado para proteger las rutas vitales. Analistas señalan que la estrategia yihadista ha pasado de la conquista territorial al estrangulamiento económico del gobierno, debilitando su legitimidad y sus fuentes de ingresos.

El incremento de la violencia yihadista se produce en un contexto de creciente crisis política y debilitamiento de la Junta Militar. El 10 de julio, el general Assimi Goïta promulgó una ley que le otorga un mandato presidencial renovable de cinco años sin celebrar elecciones, ampliando los poderes presidenciales y prolongando indefinidamente el periodo de transición iniciado tras el golpe de 2020. La medida, aprobada unánimemente por el Consejo Nacional de Transición, institucionaliza su control sobre el poder ejecutivo. Posteriormente, en agosto, las tensiones políticas en el país se visibilizaron dentro del aparato estatal, tras el arresto de dos generales y varios oficiales acusados de conspirar contra el régimen. El episodio coincidió con el quinto aniversario del golpe de 2020 y reveló las divisiones latentes dentro del Ejército, agravadas por la concentración de poder y la influencia de actores extranjeros. Paralelamente, las relaciones internacionales se deterioraron. El 4 de septiembre, el gobierno de Goïta demandó a Argelia ante la Corte Internacional de Justicia por el derribo de un dron maliense en marzo, lo que fue

rechazado por Argel. Las relaciones con Francia también se agravaron tras la detención de un diplomático francés. Países respondió suspendiendo su cooperación antiterrorista.

## MOZAMBIQUE

### Se inicia el Diálogo Nacional Inclusivo con la ausencia del principal líder opositor

El 10 de septiembre se inició el llamado proceso de Diálogo Nacional Inclusivo en el país, que se extenderá hasta noviembre de 2026. El comienzo del Diálogo, que surge tras las crisis política y electoral en el país provocada a finales de 2024, no contó con la presencia del líder clave de la oposición, Venâncio Mondlane, quien impulsó la principal fuerza política (PODEMOS) de las protestas ciudadanas y que posteriormente abandonó el partido. Sin embargo, su ausencia en la Comisión Técnica que guía el diálogo se podría subsanar tras la autorización del Ministerio de Justicia a registrar su nuevo partido, denominado **Anamola** (Alianza Nacional para un Mozambique Libre y Autónomo). Finalmente, esa autorización se produjo en septiembre. **El acuerdo sobre el Diálogo Nacional Inclusivo fue firmado en marzo** pasado por el presidente Daniel Chapo y nueve partidos políticos, antes de la creación de Anamola, que no tiene escaño en la Comisión, a pesar de que Mondlane quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de octubre de 2024 y tiene una capacidad de movilización mucho mayor que cualquier otra figura de la oposición.

El inicio del Diálogo se produce en medio de un incremento de la inseguridad en la provincia norteña de Cabo Delgado. Entre finales de julio y principios de agosto el Estado Islámico de la Provincia de Mozambique (ISMP) intensificó los ataques contra los distritos del sur de Cabo Delgado, desplazando a unas 55.000 personas en los distritos de Chiúre y Ancuabe. Posteriormente, en septiembre el ISMP atacó los distritos de Macomia y Muidumbre, la ciudad portuaria clave de Mocímboa da Praia y mantuvo su presencia en el distrito de Palma, donde la empresa francesa TotalEnergies tiene un proyecto de gas natural licuado de 20.000 millones de dólares. Los ataques de Mocímboa da Praia y la presencia sostenida en Palma, áreas donde se concentra la mayor presencia militar mozambiqueña y ruandesa, señalan una nueva estrategia militar de la insurgencia que puede volver a incrementar la inestabilidad en la región.

## RDC (ESTE) – RWANDA

### Se incumplen los acuerdos entre los dos países y entre RDC y el M23 mientras persiste la violencia en el este de RDC

Persiste el clima de violencia en las provincias congoleesas de Kivu Norte y Kivu Sur por parte del grupo armado M23 y se evidencia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la República Democrática del Congo (RDC) y

Rwanda, así como entre la RDC y el M23. Tras décadas de conflicto, que han dejado millones de desplazados y miles de muertos, en la primera mitad del año se pusieron en marcha esfuerzos diplomáticos, encabezados por EEUU y Qatar que culminaron con la firma de diversos acuerdos. **En junio de 2025, la RDC y Rwanda firmaron un acuerdo de paz en Washington, mediado por EEUU**, que incluía la retirada de tropas ruandesas del territorio congolés, la cooperación en seguridad (creación de un mecanismo de coordinación de seguridad conjunta en el plazo de 30 días) y el establecimiento de mecanismos de integración económica regional (en un plazo de 90 días). La RDC debía facilitar el desmantelamiento del grupo armado FDLR, tras lo cual Rwanda retiraría sus tropas desplegadas en la RDC. Este acuerdo, sin embargo, no incluía directamente al M23, lo que limitaba su alcance frente a la violencia. En paralelo, en julio, **la RDC y el M23 firmaron en Doha, Qatar, una declaración de principios que establecía un alto el fuego** y un proceso hacia un acuerdo de paz integral. Las conversaciones, apoyadas por Qatar, EEUU y la Cruz Roja, incluían la creación de mecanismos de monitoreo del cese de hostilidades y el intercambio de prisioneros. A pesar de estos esfuerzos, **los plazos para lograr avances concretos se han incumplido, y la violencia continúa**, lo que evidencia la fragilidad de los acuerdos.

En este sentido, las acciones del M23 persistieron durante el trimestre. **El ACNUDH denunció que el M23 había ejecutado a 319 civiles**, incluyendo 48 mujeres y 19 menores, durante el mes de julio. La violencia de este grupo ha incluido ejecuciones sumarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual sistemática, actos que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. **La ONU ha señalado que también las Fuerzas Armadas congoleesas y las milicias que las apoyan han cometido graves violaciones de derechos humanos**. La situación humanitaria sigue siendo muy grave, ya que más de siete millones de personas han sido desplazadas, y miles han sufrido violencia sexual. En concreto, la ONU registró 23.000 casos de violencia sexual en 2023, y en los primeros cinco meses de 2024 la cifra se incrementó a 17.000. No obstante, cabe destacar que EEUU anunció en agosto **sanciones al grupo armado PARECO-FF y a la empresa congoleesa CDMC** por tráfico ilícito de minerales procedentes de la principal mina de coltán del país, en Rubaya.

Diversos análisis han destacado que la clave del éxito de los acuerdos de Washington y Doha reside en su implementación creíble, un seguimiento riguroso y la inclusión de la sociedad civil, evitando que los acuerdos se perciban como instrumentos de legitimación internacional o de explotación de recursos naturales. Voces críticas apuntan que el interés estadounidense podría centrarse en acceder a minerales estratégicos como el cobalto, el litio y el oro, en lugar de priorizar la justicia y la seguridad de la población congoleesa. Organizaciones locales, como Save the Congo, y figuras como el premio Nobel de la paz Denis Mukwege, consideran que los acuerdos excluyen a la sociedad civil y perpetúan la impunidad. Qatar ha jugado un papel

destacado como mediador, subrayando su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y actuando como plataforma de negociación para la RDC, Rwanda y M23. Expertos advierten que, para consolidar la paz, es crucial mantener una presión internacional sostenida, asegurar recursos para programas de desarme y reintegración y lograr la cooperación regional, minimizando el riesgo de nuevos actores que puedan socavar el proceso.

En paralelo, el ex presidente Joseph Kabila fue condenado a muerte in absentia a finales de septiembre por su presunto apoyo al M23, aunque su arresto parece improbable. La sentencia refleja la tensión política interna y la lucha por el poder dentro del país, especialmente frente al Gobierno de Félix Tshisekedi.

## SAHEL OCCIDENTAL

### Burkina Faso, Malí y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional

El 16 de septiembre los ministros de Justicia de Burkina Faso, Malí y Níger –países que integran la Alianza de Estados del Sahel (AES)– se reunieron en Niamey para coordinar su **retirada formal de la Corte Penal Internacional (CPI)**. La decisión, que fue confirmada oficialmente el 22 de septiembre, refleja una estrategia conjunta de las Juntas militares de los tres países para reducir la influencia internacional en sus asuntos judiciales y reforzar su autonomía en materia de seguridad y gobernanza, y se enmarca en un contexto de deterioro de las relaciones con las potencias occidentales y de fortalecimiento de alianzas regionales y extrarregionales alternativas.

Durante la reunión inicial, el primer ministro de Níger declaró que la CPI “se ha convertido en una herramienta de represión al servicio de intereses extranjeros”. En este marco, la AES anunció la creación de un **Tribunal Penal Saheliano para los Derechos Humanos**, destinado a juzgar crímenes internacionales, actos de terrorismo y delitos de crimen organizado cometidos en la región. El plan también incluye el establecimiento de una prisión de alta seguridad compartida entre los tres países.

Si bien el cronograma oficial de retirada no fue detallado, la Alianza precisó que el proceso se realizará conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, lo que implica que

la salida será efectiva un año después de que la decisión sea presentada al Secretario General de las Naciones Unidas. Aun así, la CPI conservará jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de la fecha efectiva de retirada, en particular los casos abiertos en Malí desde 2012 relacionados con crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos. **Amnistía Internacional** calificó la retirada como un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y recordó que la salida no exime a los Estados de sus obligaciones actuales con la Corte y pidió a los países miembros de la CPI que insten a Burkina Faso, Malí y Níger a reconsiderar su decisión.

## SUDÁN DEL SUR

### Aumenta el riesgo de colapso del acuerdo de paz en el país

La Comisión Conjunta de Monitoreo y Evaluación Reconstituida (RJMEC) **advirtió** que el acuerdo de paz de 2018 (Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, R-ARCSS) está en riesgo de colapso, citando fallas generalizadas en la implementación y profundizando la desconfianza política entre las partes signatarias. La Comisión advirtió que el país corre el riesgo de volver a caer en un conflicto armado a menos que se tomen medidas inmediatas y coordinadas y solicitó un alto el fuego inmediato, un diálogo inclusivo entre los partidos, la implementación acelerada del acuerdo y la liberación de las personas detenidas. Entre estas últimas, se encuentra el primer vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, quien ha estado bajo arresto domiciliario desde marzo después de que el gobierno de transición del que forma parte lo acusara de actividades subversivas contra el presidente Salva Kiir. La tensión política se deterioró aún más a raíz de que el 11 de septiembre el Gobierno presidido por Kiir anunciase **cargos de traición, asesinato y crímenes de lesa humanidad** contra Machar y otros siete funcionarios de la oposición, todos ellos procedentes de la comunidad nuer. En respuesta, el partido de Machar, el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-En la Oposición (SPLA-IO), declaró al gobierno “ilegítimo” y prometió buscar un “cambio de régimen”, instando a sus fuerzas y partidarios a movilizarse para la guerra. Expertos sostienen que enjuiciar a Machar podría exacerbar las divisiones étnicas y romper definitivamente el acuerdo de paz, volviendo a la guerra civil.

## AMÉRICA

**COLOMBIA:** El Gobierno reabre negociaciones con el Clan del Golfo en Qatar

### COLOMBIA

#### El Gobierno reabre negociaciones con el Clan del Golfo en Qatar

Se reabren negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la organización paramilitar Clan del Golfo en Qatar. Los contactos, que se habían iniciado en 2024 y se habían visto interrumpidos posteriormente, tendrán lugar en Qatar, a donde se han desplazado integrantes del grupo narcoparamilitar, aduciendo razones de seguridad, y representantes del Gobierno colombiano. Las negociaciones, que estarán enfocadas en gran medida en la cuestión de los cultivos ilícitos, tendrán el formato de un espacio de conversación socio-jurídico con el que minimizar el impacto de la violencia. No se trata por tanto de unas negociaciones de paz como las llevadas a cabo con otros grupos armados de oposición, con agendas políticas, sino que Álvaro Jiménez, el jefe negociador del Ejecutivo, precisó que el objetivo de este proceso es lograr una desescalada del conflicto. Tras una reunión en Doha a mediados de septiembre, el Gobierno y el Clan de Golfo acordaron la creación de grupos de trabajo para abordar cuestiones relativas al medioambiente, así como a la migración irregular y que estarán centrados en la situación de cinco municipios que son epicentro de la acción armada del Clan del Golfo. Uno de los objetivos del acuerdo sería el proporcionar medios de vida alternativos al del cultivo ilícito y el fortalecimiento del Estado en las zonas afectadas por la presencia del grupo narcoparamilitar. No obstante, a pesar del reinicio de las conversaciones, persistieron los enfrentamientos armados en Colombia entre el grupo narcoparamilitar y el ELN.

El anuncio de las negociaciones con el Clan de Golfo se produjo en paralelo a la reactivación del diálogo con 16 antiguos dirigentes de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a los que designó como gestores de paz. Si bien las AUC ya firmaron un acuerdo con el Gobierno colombiano en 2003, el presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló su voluntad de concluir el proceso de desmovilización. La Mesa Técnica de diálogo tendría como objetivo principal evaluar si los compromisos asumidos bajo la Ley de Justicia y Paz que llevó a la desmovilización paramilitar han sido efectivos y qué cuestiones quedan pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El acuerdo con las AUC fue objeto de importantes críticas en el momento de su firma, ya que amplios sectores de la población, incluyendo organizaciones de defensa de los derechos humanos, lo calificaron como un pacto de impunidad frente a las graves violaciones cometidas por los paramilitares.

Asimismo, el dirigente del ELN Pablo Beltrán abrió la puerta al reinicio de las negociaciones de paz con el Gobierno apuntando a la posibilidad de cambiar el modelo de conversaciones y al cumplimiento de lo acordado en los procesos previos. No obstante, desde el equipo negociador del Gobierno, encabezado por Vera Grabe, se señaló que fue el ELN quien abandonó el proceso y que no es suficiente con afirmar que se quiere reanudar la negociación. Grabe señaló que el Gobierno está a la espera de recibir propuestas concretas que permitan reactivar las conversaciones.

## ASIA Y EL PACÍFICO

**CAMBOYA – TAILANDIA:** Los enfrentamientos fronterizos entre ambos países provocan la muerte de decenas de personas y el desplazamiento forzoso de otras 300.000

**INDONESIA:** El país vive las protestas más masivas de las últimas décadas

**PAKISTÁN:** Protestas multitudinarias en la Cachemira administrada por Pakistán finalizan tras alcanzarse acuerdo con el Gobierno

### CAMBOYA – TAILANDIA

#### Los enfrentamientos fronterizos entre ambos países provocan la muerte de decenas de personas y el desplazamiento forzoso de otras 300.000

Como mínimo 43 personas murieron y más de 300.000 se tuvieron que desplazar forzosamente por los enfrentamientos fronterizos entre las Fuerzas Armadas de ambos países que se registraron a finales de julio cerca del templo de Ta Muen Thom y que se extendieron rápidamente

a otros distritos, especialmente Oddar Meanchey y Preah Vihear en Camboya, y a Surin y Ubon Ratchathani en Tailandia. Algunas fuentes no oficiales sostienen que la cifra de víctimas mortales fue bastante más elevada. Además de las decenas de víctimas mortales, los cientos de personas heridas y los cientos de miles de personas desplazadas, también se produjeron numerosos daños sobre infraestructura civil y sobre monumentos religiosos y culturales, como el templo de Preah Vihear –declarado

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y uno de los principales del conflicto histórico en el que se enmarcan estas hostilidades—, y una pagoda budista en la comuna de Kok Mon, en Oddar Meanchey. El Gobierno tailandés señaló que en los primeros días de combates se tuvieron que cerrar como mínimo 852 escuelas y siete hospitales. Según varias fuentes, ambas partes **emplearon armamento pesado**, incluyendo aviones de combate F-16, vehículos de combate de infantería, drones y sistemas de cohetes. Además, el Gobierno tailandés reconoció haber utilizado bombas racimo para atacar determinados objetivos militares. Después de que dos soldados tailandeses que patrullaban regiones fronterizas resultaran heridos por minas antipersona, Bangkok acusó a Camboya de haber plantado minas en territorio tailandés. Organizaciones de derechos humanos instan a una **investigación dirigida por las Naciones Unidas** sobre presuntos crímenes de guerra y daños a civiles, mientras que **Human Rights Watch** instó a Tailandia y Camboya a no utilizar municiones en racimo y a ratificar la Convención sobre Municiones en Racimo.

Tras varios días de enfrentamientos de alta intensidad, el 28 de julio los líderes de ambos países, Phumtham Wechayachai y Hun Manet se reunieron en Kuala Lumpur bajo los auspicios de Anwar Ibrahim, primer ministro de Malasia —país que detenta la presidencia rotatoria de ASEAN— y con la presencia de funcionarios de EEUU y China. Previamente, el 26 de julio, el presidente estadounidense **Donald Trump llamó a ambos líderes** para presionar por una tregua y amenazar con la suspensión de las conversaciones comerciales y el incremento de los aranceles a ambos países. A principios de agosto, ambos Gobiernos se reunieron durante cuatro días en Kuala Lumpur para **definir los términos del cese de hostilidades**, acordaron permitir que observadores de ASEAN supervisaran el alto el fuego y se **comprometieron** a poner fin a los movimientos de tropas y patrullas fronterizas. Según la declaración conjunta del llamado Comité General de Fronteras, cada país establecerá su propio equipo de observadores provisionales, integrado por funcionarios de ASEAN y coordinado por el primer ministro de Malasia, en espera del despliegue de una misión de observación formal. A pesar de que ambas partes acordaron la prolongación de la tregua, en los días inmediatamente posteriores a la misma se acusaron en numerosas ocasiones de haberla violado, incluyendo seis incidentes con minas antipersona. En este sentido, uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la captura de 18 soldados camboyanos apenas horas después de la entrada en vigor del alto el fuego. Bangkok los considera prisioneros de guerra y declaró que solamente serían liberados y repatriados tras el fin del conflicto. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambos países a respetar plenamente el acuerdo y a crear un entorno propicio para abordar el contencioso fronterizo histórico y lograr una paz duradera.

Los enfrentamientos fronterizos de finales de julio se enmarcan en un contencioso de larga duración por la falta de acuerdo en la demarcación fronteriza, especialmente en los alrededores del templo hindú Preah

Vihear. En el periodo entre 2008 y 2011 ya se habían registrado enfrentamientos bélicos de gravedad. En cuanto a la situación en 2025, en febrero ya se produjo un intercambio de fuego entre los ejércitos de ambos países que provocó la muerte de un soldado camboyano y comportó el cierre de varios pasos fronterizos. A finales de mayo, otro intercambio de fuego provocó la muerte de otro soldado camboyano cerca del mencionado templo hindú, en una región conocida como Triángulo Emerald. En los días posteriores, el Gobierno de Tailandia denunció numerosas incursiones de personas civiles camboyanas a modo de provocación, así como la acumulación de tropas y equipamiento bélicos en varias partes de la frontera común. En junio, tres soldados tailandeses resultaron heridos, y a finales de julio, el día anterior al inicio de los enfrentamientos de alta intensidad, otros cinco soldados tailandeses también resultaron heridos por otra mina antipersonal. Posteriormente, Tailandia cerró varios pasos fronterizos y templos, **llamó al embajador a consultas**, redujo los lazos diplomáticos con Camboya y expulsó del país a un enviado especial de Camboya.

## INDONESIA

### El país vive las protestas más masivas de las últimas décadas

A finales de agosto y principios de septiembre Indonesia vivió algunas de las **movilizaciones más masivas de las últimas décadas**, que finalizaron con la muerte de como mínimo 10 personas, la detención de miles de ellas (las cifras oscilan según las fuentes), la cancelación de clases en numerosas universidades y centros educativos, e importantes daños materiales en numerosas ciudades del país, incluyendo el incendio de los parlamentos regionales en tres provincias (Nusa Tenggara Occidental, Java Central y Java Occidental), la destrucción de edificios públicos en ciudades como Makassar o Surabaya o el pillaje de las residencias de algunos parlamentarios. Las **protestas se iniciaron a finales de agosto** en Yakara, pero también en otras 38 provincias del país, tras hacerse público que la Cámara de Representantes había incrementado sustancialmente el subsidio mensual para vivienda de 580 legisladores. Si bien en un principio las movilizaciones se focalizaron principalmente en dicha medida, progresivamente **fueron incorporando otras cuestiones**, como la creciente situación de precariedad económica (incremento de los precios de la educación, vivienda o alimentación), la disolución del Parlamento, o la reforma de la policía o la renuncia de su máximo responsable, especialmente tras la muerte de un manifestante atropellado por un coche de policía.

A principios de septiembre, la Oficina del ACNUDH instó a Indonesia a llevar a cabo investigaciones exhaustivas y transparentes sobre la muerte de seis personas durante las protestas, y puso énfasis en la necesidad de que las fuerzas de seguridad cumplan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, de proteger los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y de garantizar la libertad de prensa durante los disturbios. El Gobierno

señaló que ya había iniciado sus propias investigaciones al respecto y también declaró que, entre otras **medidas**, se había reducido el importe del mencionado subsidio para vivienda, que se había suspendido a algunos legisladores por comentarios insensibles e inapropiados, que se había presentado una propuesta para la reforma de la Policía y que el **Gobierno había sido remodelado**, con la sustitución de varios ministros.

Aunque varios análisis consideran que las protestas de finales de agosto y septiembre son el principal reto al que ha tenido que hacer frente hasta el momento el presidente Prabowo tras su llegada al poder en 2024, cabe recordar que dichas protestas se enmarcan en un ciclo de protestas ciudadanas durante buena parte del 2025. A modo de ejemplo, a mediados de agosto más de 100.000 personas se habían movilizado en la regencia de Pati (provincia de Java Central) para protestar contra la decisión del gobierno regional de aumentar los impuestos sobre la tierra y la construcción, registrándose importantes enfrentamientos entre la Policía y varios manifestantes. En las mismas fechas, coincidiendo con el día de la Independencia (17 de agosto), miles de personas en todo el país adoptaron la bandera negra de una serie de manga japonesa (“**One Piece**”) como símbolo de protesta contra el gobierno. Organizaciones de derechos, como Amnistía Internacional, criticaron tanto las amenazas del Gobierno de prohibir tal bandera como los diversos casos de acciones policiales contra personas que vendían o exhibían dicha bandera. Previamente, sobre todo en febrero y en marzo, también se habían registrado movilizaciones masivas contra el Gobierno, especialmente sus políticas económicas, el creciente protagonismo de los militares en el gabinete, así como las acusaciones sobre la corrupción o el deterioro de los estándares de democracias en el país. Tanto en agosto como en los ciclos de movilizaciones previas, el colectivo estudiantil jugó un papel preponderante.

## PAKISTÁN

### Protestas multitudinarias en la Cachemira administrada por Pakistán finalizan tras alcanzarse acuerdo con el Gobierno

La región de Azad Jammu y Cachemira (AJK), área de Cachemira administrada por Pakistán y con estatus autónomo, fue escenario de intensas protestas sociales durante el mes de septiembre –las más multitudinarias de los últimos años, que finalizaron después de que se alcanzara un acuerdo con el Gobierno pakistaní para dar respuesta a las demandas que motivaron las movilizaciones. Las protestas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad pakistaníes y murieron al menos nueve personas –incluyendo tres policías– y otras 100 resultaron heridas. Las movilizaciones estaban lideradas por la Awami Joint Action Committee (JAAC, por sus siglas en

inglés), una alianza conformada por diferentes grupos que bloqueó la Cachemira administrada por Pakistán durante varios días. Miles de personas de toda AJK se congregaron en Muzaffarabad para participar en las manifestaciones de protesta. **En el trasfondo de las movilizaciones estaban las reclamaciones al Gobierno pakistaní de subsidios al trigo y la electricidad, entre otras cuestiones de un total de 38 puntos con los que los manifestantes pretendían acabar con los privilegios de las élites gobernantes, como señalaba JAAC.**

Los antecedentes de estas protestas están en las movilizaciones que se iniciaron en 2023 y se extendieron durante 2024 para protestar por el notable incremento del precio de la energía y el trigo, así como por el impacto que estaba teniendo el contrabando de harina y otros productos básicos. Representantes de todos los distritos de AJK se unieron en este tiempo conformando la JAAC. Las protestas de septiembre de 2025 se produjeron después que los organizadores señalaran que un año después de protestas similares el Gobierno no había dado respuesta a sus reivindicaciones. **Cabe señalar que además de las demandas relativas a cuestiones como los subsidios a la alimentación y la energía eléctrica, se incluían asuntos de gobernanza**, como la reducción en el número de ministros en el Gobierno de Azad Jammu y Cachemira y la supresión de los 12 escaños reservados a personas refugiadas procedentes de la Cachemira administrada por la India. JAAC sostiene que los refugiados tras la partición de 1947 y sus descendientes se han convertido en una élite privilegiada que acapara fondos destinados al desarrollo del territorio. También se solicitaba la retirada de cargos contra las personas detenidas durante las movilizaciones previas de 2023 y 2024 o la reforma de algunos impuestos, entre un amplio abanico de peticiones.

Si bien inicialmente el gobierno local puso en marcha un bloqueo de las comunicaciones –incluyendo internet y la telefonía móvil–, ordenó el cierre de las instituciones educativas de forma indefinida y reclamó el despliegue de fuerzas paramilitares y policiales procedentes de otras zonas del país, finalmente el Gobierno pakistaní inició negociaciones con los líderes de JAAC y el primer ministro Shehbaz Sharif designó una delegación de alto nivel para llevar a cabo las conversaciones. Fruto de las negociaciones **se alcanzó un acuerdo** que contempla continuar los subsidios al trigo y a la electricidad, previamente pactados tras las movilizaciones de años anteriores, pero de cuyo incumplimiento se quejaba la población cachemira. Además, el pacto contempla la aceptación de varias de las demandas presentadas, incluyendo la reducción del número de ministros y mejoras en salud, educación y otros servicios públicos. Las organizaciones sociales se mostraron satisfechas con el acuerdo y acordaron desconvocar las protestas. No obstante, la cuestión de la asignación de los 12 escaños para las personas refugiadas quedó sin resolver, lo que podría llevar a la reactivación de la tensión en el futuro.

## EUROPA

**ARMENIA – AZERBAIYÁN:** Avances en las negociaciones, pero criminalización de la sociedad civil pro-paz por el Gobierno azerbaiyano

**TÜRKIYE (PKK):** Nuevos pasos en el proceso de paz, junto a llamamientos a fortalecerlo

### ARMENIA – AZERBAIYÁN

#### Avances en las negociaciones, pero criminalización de la sociedad civil pro-paz por el Gobierno azerbaiyano

Armenia y Azerbaiyán firmaron el 8 de agosto una **Declaración Conjunta de 7 puntos**, rubricada también por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el marco de una reunión trilateral en la Casa Blanca, la primera a ese nivel desde el fin de la Guerra Fría. El pacto se interpreta como un paso significativo hacia un futuro acuerdo de paz. El primer punto consiste en el respaldo al texto acordado hasta ahora del Acuerdo para el Establecimiento de la Paz y Relaciones Inter-estatales entre la República de Azerbaiyán y la República de Armenia y el reconocimiento mutuo de la necesidad de más pasos hacia su firma y ratificación final. La Declaración aborda además un tema divisorio, la conexión terrestre entre Azerbaiyán y el enclave azerbaiyano de Najicheván a través de Armenia. El punto 3 afirma que se producirá dicha conexión, enmarcada en un compromiso de respeto a la soberanía, integridad territorial y jurisdicción de los Estados. El punto 4, interrelacionado, establece que Armenia, EEUU y terceras partes desarrollarán un proyecto de ruta denominado “Ruta Trump para la Paz Internacional y la Prosperidad” (TRIPP).

El preacuerdo alcanzado incluye también la firma de una petición conjunta de cierre del llamado Proceso de Minsk de la OSCE, estructura que durante décadas actuó como espacio de diálogo y mediación y que desde la ofensiva militar azerbaiyana y guerra de 2020 y, especialmente la ofensiva de 2023, había quedado inactiva, paralizada por las divisiones internas geoestratégicas y las resistencias de Azerbaiyán. La declaración recoge también otros aspectos como el compromiso con la inviolabilidad de las fronteras internacionales, el rechazo al uso de la fuerza para la toma de territorio y el rechazo a cualquier “intento de venganza”, expresión no explicada en el texto, pero que en periodos anteriores ha aludido a los casos abiertos en la justicia internacional.

En conjunto, el pacto constituye un avance hacia una normalización de relaciones que contribuya a prevenir nuevos ciclos de violencia directa. En septiembre se dieron nuevos pasos, como visitas mutuas de los **presidentes de las comisiones fronterizas** y una **reunión de ministros de Exteriores en Nueva York**. A inicios de octubre, Armenia confirmó que estaban en marcha las consultas y **planificación técnica** entre EEUU y Armenia para la futura construcción de la ruta TRIPP. Confluyó también una cierta desescalada en el Sur del Cáucaso, con un acercamiento entre Türkiye y Armenia. No obstante, la declaración y el proceso de paz Armenia-Azerbaiyán mantienen un foco estado-

céntrico, sin abordar el derecho al retorno de poblaciones desplazadas, incluida la población armenia de Nagorno-Karabaj desplazada casi en su totalidad por la ofensiva azerbaiyana de 2023; y excluye retos en memoria, justicia, reparación y reconciliación. Sobre el derecho al retorno, el primer ministro armenio lo calificó de **“factor peligroso” para la paz**. A su vez, para la firma final del acuerdo quedan pendientes de abordar temas en conflicto, como exigencias de Azerbaiyán de cambios en la Constitución de Armenia. Junto a la Declaración se firmaron memorándums bilaterales con EEUU sobre economía, comercio, control de fronteras y defensa. Trump anunció el fin del bloqueo a la cooperación militar con Azerbaiyán.

Previamente a la reunión y con posterioridad, organizaciones de derechos humanos y análisis independientes alertaron sobre la continuación por parte de Azerbaiyán de la criminalización y persecución contra figuras activistas y académicas que promueven la paz y la reconciliación con Armenia, defensores y organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes. Según **Human Rights Watch**, el Gobierno de Azerbaiyán ha agravado desde 2023 la represión contra estos sectores. **Análisis alertaron** de nuevas condenas de prisión y hostigamiento en los últimos meses. En ese clima, se hace necesario más esfuerzos internacionales por parte de gobiernos y organismos, incluyendo en sus diálogos bilaterales con Azerbaiyán y aliados de este, para abordar la protección de la población civil constructora de paz.

### TÜRKIYE (PKK)

#### Nuevos pasos en el proceso de paz, junto a llamamientos a fortalecerlo

El proceso de diálogo iniciado en 2024 entre Türkiye y el PKK ha avanzado en los últimos meses, aunque con limitaciones y necesidad de ampliación. Entre los avances, tras dilaciones y trabajos preparatorios, el 5 de agosto arrancó la comisión parlamentaria multipartita “Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia”. Tiene el mandato de elaborar recomendaciones de reformas legales y políticas para su aprobación parlamentaria y que potencialmente podrían abarcar cuestiones como desmovilización y amnistía, entre otras, y supervisar el proceso de paz, incluyendo aspectos como desmovilización y amnistía. La comisión reúne a 51 miembros de 11 partidos (todo el espectro parlamentario salvo el nacionalista IYI, que rechazó participar). Según prensa, solo entre 9 y 10 eran mujeres. Tras el rechazo de IYI, los escaños se redistribuyeron: 22 al AKP, 11 al opositor CHP, cinco al prokurdo DEM, cuatro al ultranacionalista MHP, y el resto entre Yeni Yol Partisi, Hüda Par, YRP, TIP, EMEP, DSP y DP.

Entre el 5 de agosto y el 2 de octubre la comisión celebró 13 reuniones centradas en sesiones de escucha, con representantes de numerosos sectores: cargos de Interior, Defensa y servicios de inteligencia (8 de agosto, bajo **confidencialidad** y actas selladas a 10 años), familiares de víctimas (incluidas Madres del Sábado/Madres de Paz), asociaciones de veteranos, organizaciones de derechos humanos, de paz y humanitarias, asociaciones jurídicas, sindicatos, organizaciones empresariales, ex presidentes parlamentarios y académicos. Se trató de sesiones a puerta cerrada. Trascendió la **prohibición del uso del kurdo** en estas sesiones, muy criticada por actores prokurdo y de derechos humanos, y tensiones por algún **testimonio considerado retraumatizante**. También se compartieron propuestas de reformas sobre los distintos temas abordados, incluida la **definición de ciudadanía de Turquía**. Según el Centro de Estudios Kurdo, **un 60% de la población turca y hasta un 80% de la kurda apoyaban** el proceso de paz. Tras este periodo de audiencias, la comisión prevé emitir un informe con recomendaciones.

La constitución de la comisión se suma a otros pasos recientes. El PKK envió un **mensaje de buena voluntad** con una **ceremonia simbólica de desarme**, el 11 de julio en Suleimaniya (Kurdistán iraquí), donde 30 combatientes (15 hombres y 15 mujeres) quemaron sus armas. Asistieron altos cargos del PKK y un centenar de observadores, incluidas figuras de la sociedad civil de Türkiye y partidos kurdos de Türkiye e Irak. Instituciones kurdas iraquíes garantizaron la seguridad del acto, en coordinación con Türkiye. La escenificación siguió al **histórico anuncio del PKK de fin de la lucha armada y disolución**.

Pese al paso significativo que supone el establecimiento de la comisión en agosto y sus sesiones de escucha con multiplicidad de actores, el movimiento político y social prokurdo reclama avances más concretos en el proceso de paz. A finales de septiembre, el **partido prokurdo DEM** valoraba positivamente diferentes elementos del proceso, como la ausencia casi total de confrontación armada, la continuación del diálogo, la creación de la comisión, pero reclamaba que el Parlamento avance en legislación y dé respuesta a demandas de reconocimiento de derechos lingüísticos del idioma kurdo, fortalecimiento de los gobiernos locales, finalización de la política de destitución de alcaldes/as electos y de la imposición de gobernadores locales designados por el Ministerio de Interior, interlocución de la comisión parlamentaria con el líder del PKK, Abdullah Öcalan, y aplicación del “derecho a la esperanza” y revisión de su prisión perpetua, reformas en legislación antiterrorista y código penal, entre otras. Tras nuevas reuniones entre el líder del PKK y la delegación del DEM (28 de agosto, 3 octubre), Öcalan afirmó que se necesitaban nuevos pasos políticos y legales en el proceso.

La evolución del proceso de paz seguía influida por las negociaciones entre las fuerzas kurdas de Siria (SDF) y el Gobierno de transición sirio y la implementación de su acuerdo del 10 de marzo, y por la posición de Türkiye en relación a estas (véase apartado de Siria en esta publicación). Análisis señalaron **mayor presión y amenazas turcas a las SDF**, lo que fue criticado por el prokurdo DEM. A mediados de septiembre, el líder del PKK envió una **carta a tribus árabes sirias apelando a la unidad árabe-kurda** y al apoyo a las SDF.

## ORIENTE MEDIO

**SIRIA:** Diversos focos de violencia evidencian los múltiples retos de la transición en el país, que celebra sus primeras elecciones post-Assad

### SIRIA

#### Diversos focos de violencia evidencian los múltiples retos de la transición en el país, que celebra sus primeras elecciones post-Assad

Durante el trimestre Siria fue escenario de diversos focos de violencia y tensión que evidencian los retos y fragilidad de la transición en el país. Uno de los epicentros de inestabilidad se ubicó en el sur. En julio se produjo una de las escaladas más graves de los últimos meses, después de una serie de secuestros y ataques cruzados entre milicias beduinas y drusas en la provincia de Suweida, que provocaron la muerte de un millar de personas. Las fuerzas del gobierno interino se desplegaron en la zona, pero fueron atacadas por milicias drusas que recelan de la presencia de las nuevas autoridades en el sur de país, que durante años ha vivido de facto en una situación de semi autonomía. Sectores drusos acusaron a las fuerzas

gubernamentales de alinearse con las tribus beduinas y de ejecuciones sumarias de civiles. En este contexto, Israel intensificó su intervención en Siria y lanzó decenas de ataques, en un intento por restringir la presencia de las fuerzas militares sirias del sur del país, en particular de la zona próxima a los Altos del Golán. Una de las ofensivas israelíes más contundentes afectó el cuartel general del Ejército sirio y las inmediaciones del palacio presidencial en Damasco. El Gobierno de Netanyahu continuó justificando sus acciones en un presunto intento por defender a la comunidad drusa en Siria (también hay población drusa en Israel), aunque esta explicación genera reacciones encontradas entre los propios drusos.

La escalada de violencia motivó la activación de negociaciones mediadas por EEUU y que tuvieron lugar en París. Así, el 18 de julio se consiguió un acuerdo de alto el fuego que a grandes rasgos se mantenía al finalizar el trimestre. En septiembre, los ministros de Exteriores

de Siria y Jordania junto al enviado especial de EEUU para Siria, Thomas Barrack, anunciaron una **hoja de ruta** que, entre otras cosas, incluye mecanismos de rendición de cuentas, restauración de servicios y ayuda humanitaria en Suweida, compromisos de reconstrucción, liberación de detenidos, retorno de personas desplazadas, esfuerzos para identificar personas desaparecidas y previsión de esfuerzos de reconciliación. Cabe destacar que, paralelamente, Israel continuó con sus ofensivas en Siria y con el despliegue de fuerzas en la zona que corresponde al área de control de la misión de la ONU en los Altos del Golán. Pese a ello, el Gobierno sirio y el de Netanyahu entablaron negociaciones en agosto, mediadas por EEUU y también celebradas en París, para explorar un acuerdo de seguridad alternativo al que estaba vigente desde 1974 y que Israel dio por finalizado tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

Otro foco de tensión en los últimos meses se desarrolló en el norte e involucró a las fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés), lideradas por milicias kurdas. Según algunos análisis, los acontecimientos de julio en Suweida habrían disminuido el interés de las SDF por sumarse a las fuerzas militares gubernamentales. A partir de agosto se produjeron choques armados entre las SDF y militares sirios en Alepo y Deir Ez-Zor. A finales de agosto, el presidente del gobierno interino de Siria,

Ahmed al-Sharaa, y el líder de las SDF, Mazloum Abdi, se reunieron con Barrack para intentar contener la crisis. En este contexto, diversas figuras de las minorías drusa, kurda y alauí de Siria hicieron un llamamiento conjunto para que se establezca una gobernanza descentralizada en el país.

En este trasfondo de tensiones e inestabilidad, a principios de octubre **Siria celebró sus primeras elecciones parlamentarias desde el derrocamiento de al-Assad**. Los comicios fueron criticados por favorecer a las autoridades actualmente en el poder. Un tercio de los escaños es seleccionado directamente por al-Sharaa y los otros dos tercios a través de elecciones indirectas a través de electores de las distintas provincias –aunque en algunas la votación no se celebró–, con un número de escaños distribuidos en función de la población. El mandatario interino reconoció las imperfecciones del proceso, pero defendió que el mecanismo era el que se podía desplegar en las condiciones actuales en Siria. De las más de 1.500 candidaturas –solo un 14% mujeres–, se escogería un Parlamento de 210 escaños que tendrá entre sus funciones la aprobación de una nueva ley electoral y una nueva Constitución. En otros hechos relevantes del trimestre, cabe destacar que EEUU puso fin a décadas de sanciones contra Siria y revocó la designación como grupo terrorista a Hayat al-Sham, grupo liderado antiguamente por el actual presidente sirio.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.